

## Crisis del Estado e intervención internacional en Haití

POR Gérard PIERRE-CHARLES\*

EL 29 DE FEBRERO DEL 2004, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, respondiendo a una solicitud formulada por el presidente Boniface Alexandre recientemente instalado en lugar de Jean Bertrand Aristide, dimisionario, autorizaba, por la Resolución 1559, el envío a Haití de una fuerza multinacional.

Por dicha resolución, el consejo disponía el reemplazo, a partir del 1º de junio, de esa fuerza multinacional por una “Misión Internacional de Estabilización” cuyo mandato y duración serían definidos en un plazo de sesenta días.

La Resolución 1559 recibía el acuerdo unánime de los miembros del consejo reunidos bajo la presidencia de la República Popular de China que, de manera inusitada, daba su apoyo en el seno del Consejo de Seguridad a una intervención directa de tropas extranjeras en un Estado miembro.

Esta resolución referida a Haití cobraba así un carácter especial, ya que no correspondía a una situación clásica susceptible de provocar tal acción. Sin embargo, había sido precedida por un despliegue publicitario sin precedente en que la televisión del mundo entero mostraba imágenes poco usuales de violencia represiva y de acciones armadas, particularmente en Gonaïves, que hacían temer la guerra civil o un verdadero genocidio. Se tomaba también en un marco de crisis política de larga duración y de una situación en la que por segunda vez en diez años, Naciones Unidas debían intervenir no para conducir a la paz — ya que no se trata de una situación de guerra — pero sí para garantizar la seguridad y las condiciones de funcionamiento democrático de un Estado miembro.

Tratándose de un país de América Latina y además de una vieja República independiente, esta intervención no podía dejar de llamar la atención de los analistas y observadores sobre sus causas profundas. Sobre todo cuando este *dossier* le correspondía a la Organización de

\* Académico, escritor y político, Gérard Pierre-Charles (1935-2004) fue uno de los más prestigiados intelectuales haitianos de nuestro tiempo. *Cuadernos Americanos* reproduce el presente ensayo que constituye un importante documento sobre la situación que se vivía en Haití a principios del 2004 así como un rico testimonio sobre los problemas políticos de nuestra América en los primeros años del siglo XXI.

Estados Americanos (OEA) que ten a como mandato, desde la Cumbre de las Am ricas en Qu bec en 2001, dar seguimiento a la contienda entre la oposici n pol tica y el gobierno de Hait . Sobre todo cuando Hait , durante este a o tr gico, celebraba sus 200 a os como naci n independiente.

### *1. Crisis del Estado*

LA decisi n adoptada por el organismo internacional parec a corresponder al reconocimiento del "derecho de injerencia" preconizado desde algunos a os para enfrentar situaciones excepcionales de crisis por parte de un Estado incapaz de asumir el poder o de enfrentar un conflicto agudo. Correspond a a lo que parec a ser una situaci n susceptible de desembocar en el caos o en una virtual guerra civil. Las im genes de varios grupos armados, ampliamente difundidas a escala internacional, llevaba a los reporteros a precipitarse hacia Hait  para "contemplar" las escenas de "la armada canibal" y otros espect culos de sangre.

En el plano diplom tico, la Organizaci n de las Naciones Unidas hab a sido suficientemente informada de los antecedentes de este verdadero colapso como para no sentirse involucrada. En efecto, en 1994 hab a intervenido en Hait  para suplantar a las fuerzas de Estados Unidos compuestas por alrededor de 20 000 hombres que hab an desembarcado en el marco de la misi n cuyo lema era "restauraci n de la democracia" patrocinada directamente por el presidente William Jefferson Clinton. Las tropas se quedaron alrededor de dos a os, y desde la crisis electoral del a o 2000, consecuencia de las elecciones fraudulentas en las que instalaron una legislatura y a Aristide mismo en el poder, la OEA y m s recientemente, la Comunidad del Caribe (CARICOM), han sido parte integrante de las negociaciones y de otras intervenciones tendientes a normalizar el panorama pol tico.  stas y otras instituciones manten an al secretariado general ampliamente informado de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el r gimen de Puerto Pr ncipe, de las dificultades en la b squeda de un compromiso entre el poder y la oposici n y del desgaste de la situaci n en t rminos de gobernabilidad, del respeto a las reglas del Estado de derecho y del deterioro econ mico y social de las condiciones de vida de la poblaci n.

As , la degradaci n acelerada del clima pol tico a fines del a o 2003, con manifestaciones populares masivas y la irrupci n en la escena de ciertos grupos armados, hab an favorecido la argumentaci n de algunos Estados miembros, particularmente la de Francia, en pro de la

eventual participación de la ONU en una misión humanitaria o de mantenimiento de la paz en Haití. En efecto, la violencia desatada por los "chimères", grupos armados y mafiosos al servicio de Aristide, ponía a la orden del día la cuestión del "derecho de injerencia". Los asesinatos y exacciones de toda suerte, en un entorno de aumento de la miseria, se referían al concepto de "población en peligro" para incitar a la acción internacional. Tal decisión emanaba de la sistemática destrucción de las instituciones que alcanzó su expresión más significativa con el desmembramiento de la Policía nacional totalmente avasallada o desmoralizada. El Estado se mostró incapaz de asumir las responsabilidades y exigencias de orden democrático.

El Consejo de Seguridad de la ONU podía referirse a que tal situación implicaba una amenaza para las vidas y los bienes y convertía a Haití en un peligro para la "seguridad de la región". Sobre todo porque un clima de fin de reino nacía de la combinación de eventos importantes: la creciente movilización de la población (partidos políticos, sociedad civil, estudiantes etc.) reclamando la salida de Aristide, la presencia inopinada de grupos armados en el norte del país y la región colindante con la República Dominicana, las críticas acerbas de la prensa, el cuestionamiento de la legitimidad misma del gobierno por ciertas instancias internacionales. En un clima excepcionalmente tenso y frente a las amenazas y peligros creados por las condiciones de la caída de este bárbaro régimen que puso en marcha un plan de represalias, la población tuvo que asistir, entre desahogo, humillaciones e indignación, a la llegada de las tropas extranjeras venidas a restablecer el orden.

Tal escenario no era de ninguna manera algo novedoso. En efecto, en 1915, en un contexto local de violencia y de caos, la infantería de Marines de Estados Unidos de América había desembarcado en Puerto Príncipe, y 19 años de ocupación fueron el saldo de esta intervención. Se trataba de "restablecer el orden democrático" en Haití. Esto en un contexto regional de expansionismo y de injerencia. Cincuenta años después, en 1965, en un contexto regional de democratización generalizada y en un marco local marcado por un régimen de fuerza instaurado por los militares de las tropas de Estados Unidos de América, bajo el patrocinio de Naciones Unidas, habían intervenido con el objetivo de "restaurar la democracia".

Diez años más tarde, el intervencionismo toma la forma de una acción internacional contra el Estado mafioso, generador de terrorismo y de anarquía, que amenazaba con realizar un baño de sangre sobre una población pacífica.

En esta continuidad, la vigilancia de la gran potencia, siempre atenta y lista a corregir cualquier desorden en su vecindario, se proyecta como factor permanente. En esta ocasión, sin embargo, tal preocupación era compartida por Francia que, más allá de cualquier actitud competitiva, manifestaba una clara coincidencia de intereses. En el fondo tal coincidencia parecía corresponder a un imperativo de la globalización. Dado que Haití, debido a su retraso económico y social así como al arcaísmo de su sistema político, constituía una suerte de “disidencia histórica y geográfica” insoportable, según la lógica de esta globalización, recursos adecuados deberían ser movilizados para incorporarla a la normalización de los mercados, de la fuerza de trabajo, de los modos de vida y de los valores contemporáneos.

Tal continuidad remite en definitiva a la crisis del Estado haitiano que, durante este último siglo no ha podido lograr la adecuación de su estructura, su funcionamiento, sus métodos y sus resultados, a las exigencias del mundo moderno. En el terreno político, económico, social y cultural el Estado haitiano parece prolongar, hasta el día de hoy, el siglo XIX latinoamericano marcado por la autocracia, el régimen fuerte a ultranza que cierra los ojos a las exigencias de las mayorías, en términos de democracia, de justicia, de progreso y de desarrollo. Este Estado, expresión de una oligarquía precaria (de militares, de hombres de negocios o de políticos), no lograba, a pesar de las influencias modernizadoras provenientes del extranjero bajo la forma de capital o de modelo, dirigir la sociedad, ni estimular las fuerzas motrices susceptibles de asegurar su avance. Sin legitimidad, sin representación real de los productores o de los trabajadores, sin credibilidad entre los ciudadanos, el Estado se mantiene débil en su función de organización de la sociedad y fuerte en tanto que opresor, funcionando sobre una base de extorsiones y de violencia.

Este déficit del Estado, de manera repetitiva provoca pulsaciones en medio de las categorías sociales más avanzadas de una oposición ilustrada, pero sin llegar a cambiar el rumbo y a generar una dirección política capaz de impulsar la democracia, el desarrollo y el progreso. De ahí, un continuo bloqueo, una suerte de empate, de empantanamiento interminable, una transición que no acaba. Tal crisis de dirección, o mejor dicho esta crisis de hegemonía, no pudiendo ser resuelta en términos de desenlace violento de relación de fuerzas o de compromiso conduce a unos y otros a la tentación de buscar el apoyo de fuerzas extranjeras para rebasar el equilibrio y lograr revertir la situación que la dinámica de las fuerzas locales no permite resolver.

## 2. *Gradual cuestionamiento del poder personal*

**J**EAN BERTRAND ARISTIDE surgió a la escena política en 1990 como líder de gran popularidad, sobre todo entre los desposeídos. La revancha de los sectores conservadores haitianos tomó la forma de golpe de Estado. Democráticamente electo, fue alejado del Palacio Nacional por tres años durante los cuales vivió en Washington preparando su regreso bajo el auspicio de Estados Unidos y de la ONU. Diez años después, en el 2004, su popularidad y los cambios que anunciaba, se han evaporado. Pero, por otro lado, supo utilizar todos los atributos de la democracia para instaurar un poder antidemocrático basado en el asesinato político, la corrupción, el narcotráfico, la utilización de viejos métodos de mentira, de violencia, de simulación y de intimidación.

Tal realidad se le fue imponiendo cada vez más al pueblo sobre todo a partir de las elecciones del año 2000. Organizadas de manera ilegal, suscitaron una crisis postelectoral sin fin... Ésta, tras más de tres años de cuestionamiento, de resistencia y de combate democrático conllevó, en última instancia, al derrocamiento de Aristide.

De hecho, al regresar del exilio Aristide contaba con amplio apoyo de la población y el sostén ilimitado de la comunidad internacional, y ya entonces el ex cura de St. Jean Bosco puso en evidencia su incapacidad para hacer buen uso de los inmensos recursos de que podía disponer. En efecto, la comunidad internacional había asignado una suma de alrededor de dos mil millones de dólares, en términos de préstamos y donaciones. Este monto no esperaba nada más que los proyectos apropiados para ser puesto a disposición del gobierno y de la población desposeída de este país. La mala gestión comprometió la posibilidad que se presentaba de relanzar la economía y garantizar el éxito de un proyecto que había suscitado tanta esperanza en los medios populares. Al mismo tiempo, en el plano político el régimen, en vez de abrirse y atraer a otras categorías sociales, retomó su línea de conducta demagógica y populista recurriendo cada vez con más frecuencia a la fuerza.

La continuidad del poder había sido asumida por René Préval quien sucedió a Aristide, jugando plenamente el papel de marioneta. Cumpliendo a la letra los designios de su tutor, continuó con la política de violación de los derechos humanos, de nepotismo, y todo un juego maquiavélico destinado a garantizarle el regreso.

El rechazo de la ciudadanía a este reino anarco-populista comenzó a manifestarse en el periodo de 1995 a 2000. Provenía de la Organisation du Peuple en Lutte (OPL), que representaba la rama mejor organizada

del movimiento que hab a apoyado a Aristide. Su representaci n parlamentaria, con mayor a relativa en la C mara de diputados (35 de 83) y en el Senado (9 de 27), impuso al d o presidencial Aristide / Pr val, a Rosny Smarth como primer ministro de la oposici n.  ste tuvo todas las penas del mundo para funcionar en el marco previsto por la constituci n, vi ndose constantemente hostigado por las jugadas del Ejecutivo y de las "organizaciones populares" manipuladas en los pasillos del Palacio Nacional.

El Parlamento emprendi  acciones para frenar las violaciones al orden republicano y otras derivaciones propias del poder absoluto y populista por el cual comenzaba a funcionar el presidencialismo respaldando la impunidad y las exacciones permanentes en contra de los ciudadanos.

Ya a este nivel, las exigencias de la OPL en favor de la institucionalizaci n, la modernidad, el respeto a la ley y a la Constituci n configuraban todo un polo de atracci n para el conjunto de la poblaci n. La capacidad de convocatoria, de movilizaci n y la credibilidad misma del poder se derrumbaba. La propaganda gubernamental se esforz  entonces por atribuir las acciones de la oposici n a influencias provenientes del antiguo r gimen duvalierista o de sectores del extranjero.

En abril de 1997 abort  una tentativa del pre sidente Pr val de imponer su voluntad en las elecciones parciales para el senado en las que la oposici n ten a todas las posibilidades para reforzar su mayor a. Las denuncias de la OPL contra este comportamiento antidemocr tico surtieron efecto, exigiendo el respeto a las reglas del juego. alimentaron un vasto movimiento reivindicativo de los sectores populares, cada vez m s desconfiados y cr ticos frente a las promesas no cumplidas por el poder. Estos sectores, sin embargo, frenados, intimidados, confundidos por los m todos del populismo, tardaban en expresarse en acciones aut nomas o propiamente de apoyo a una oposici n entonces perseguida y calumniada.

A pesar de todo, la tenacidad de esa oposici n, la dimisi n del primer ministro Smarth y la imposibilidad t cnica y pol tica de reemplazarlo, suscitaron el apoyo de todo el pa s a las acciones de los parlamentarios y otros sectores de la prensa y de instituciones c vicas en favor del respeto al Estado de derecho. Tal situaci n llev  al presidente Pr val a disolver el Parlamento en diciembre de 1998, demostrando as  la incapacidad peronal de su r gimen de poder coexistir con un parlamento independiente. Mostr  asimismo su negaci n a aplicar de hecho lo prescrito por la Constituci n, previendo el funcionamiento de un Ejecutivo bic falo conforme a las necesidades del pluralismo.

### 3 *Laboriosa emergencia de una alternativa*

EN el año 2000 parece aún más evidente la imposibilidad del Estado, corroído por todos los vicios, para garantizar la gestión del país y de cohabitar al mismo tiempo con una oposición democrática. Esta incompatibilidad se hizo notoria en ocasión de la convocación y la realización de las competiciones legislativas y presidenciales. En efecto, el conflicto postelectoral a que condujo, expresión de una crisis política y social mucho más profunda, traducía el arcaísmo de las estructuras y de las instituciones así como la naturaleza de las dificultades inherentes al no desarrollo. El conflicto se hizo más profundo a medida que se expresaba la voluntad enfermiza del Ejecutivo de imponer a la nación las alcaldías, un parlamento, un presidente, en fin, de monopolizar al Estado al servicio de un solo hombre.

Los partidos de oposición que tenían todas las posibilidades de ganar las elecciones legislativas fueron despojados de los puestos ganados, extorsión que se extendió al poder judicial y a las diversas instituciones del Estado, incluyendo a la Policía. El ambiente de represión que acompañaba las acciones de fuerza contra toda oposición también favoreció la determinación y la acción unitaria de los partidos políticos de diversas tendencias (social-demócrata, democrático-popular, cristianos comprometidos, conservador moderado), llevándolos a reunirse en el seno de Convergencia Democrática. Esta coalición patriótica, cuestionando la legitimidad del gobierno y denunciando sus fechorías, minó su credibilidad en el seno de la población y estimuló la resistencia ciudadana.

La comunidad internacional por su lado, particularmente la OEA, dando seguimiento a las contestaciones ciudadanas, tuvo que promover negociaciones entre las dos partes. Negociaciones laboriosas durante las cuales el secretario general y el secretario general adjunto organizaron más de una veintena de visitas a Haití. En el transcurso de esta "misión", el Consejo de Seguridad de la OEA y la Asamblea General adoptaron importantes resoluciones que suscribió el gobierno haitiano, pero que quedaron en letra muerta debido a la voluntad gubernativa de imponer sus puntos de vista y de descartar todo compromiso.

La dinámica contestataria y de negociación impulsada por Convergencia Democrática condujo gradualmente a la toma de conciencia y a la acción militante de diversos sectores de la sociedad civil. Estudiantes, periodistas, organizaciones de derechos humanos, iglesias, asociaciones de mujeres y sector empresarial, se levantaron para reclamar

el respeto a los derechos humanos y a los compromisos aceptados por el Estado haitiano. Así, la oposición se consolidó a pesar de la voluntad de las autoridades de ahogar toda crítica, de manipular a las masas y de amordazar a la prensa. La ciudadanía comenzó a sentirse comprometida y se mostró cada vez más consciente de la naturaleza de este poder y del hecho que utilizaba, además de los mecanismos y recursos públicos, los peores instrumentos de la autocracia así como de potentes redes internacionales ligadas a su participación en el tráfico de droga.

El Estado mafioso, al presentarse en nombre del pueblo y de la causa popular, se había convertido en un instrumento eficaz a partir del no derecho, del enriquecimiento ilícito, de la impunidad, de la simulación de sus objetivos bajo un velo populista y constitucionalista. Se había dotado de un poder criminal enorme, cada día más distante de la sociedad y opuesto al progreso y a la libertad. De ahí la dicotomía cada vez más peligrosa entre ese Estado y la nación. Así, el aparato estatal al servicio de Aristide, de los barones de la droga, de los aprovechadores del régimen y de sus aliados haitianos y extranjeros, demostraba que no existía más que un objetivo: garantizar la impunidad, mantener su dominación y perennizarse en el poder.

Frente a esta realidad, la nación, en un proceso difícil de toma de conciencia, de refundación, de replanteamiento de su organización social, comenzaba a definir su proyecto de construcción de las bases materiales correspondientes a su necesidad de desarrollo y de democracia.

El año 2003 fue de ampliación e impulsión sostenidos de los sectores progresistas. La Convergencia Democrática, que reunía a las fuerzas políticas de la oposición, imprimió una orientación unitaria a todos los que obraban a favor del cambio. Constituía, al mismo tiempo la contraparte del gobierno en las negociaciones con la comunidad internacional en vista de lograr un compromiso para una salida de la crisis.

La acción de Convergencia Democrática fue reforzada y renovada por ciudadanos venidos de la sociedad civil: miles de socios de las cooperativas de ahorro, despojados de sus ahorros por timadores oficiales, los estudiantes reclamando su derecho a manifestarse y la autonomía de la Universidad, las Iglesias asociándose a las reivindicaciones de la población y de manera general, reclamando la buena gobernabilidad y el fin de la corrupción. La sociedad civil organizada, bajo el nombre de Grupo de los 184, emprendió una campaña de participación cívica en la que encontraron cabida los elementos más dinámicos de la instituciones privada, de los reagrupamientos de universita-

rios, de las asociaciones de mujeres, de las organizaciones de defensa a los derechos humanos etc. La movilización de estos sectores conllevó al conjunto de la población a manifestarse contra el régimen, con el efecto de exasperar la barbarie de los órganos represivos contra estos activismos y particularmente contra los estudiantes universitarios.

Desde entonces, el movimiento cívico, reagrupando a la sociedad civil y a grupos políticos, alcanzó un mayor impulso, dando lugar a manifestaciones callejeras que reunían a más de 100 000 personas. Las bases de consenso social se habían encontrado para combatir la dictadura. El esquema y el contenido de la transición a un régimen democrático y de garantía a los derechos humanos se afirmaba, y con este vasto movimiento de la sociedad se dibujaban las líneas de un proyecto alternativo de carácter republicano que pudiera conducir a la realización de las elecciones.

A principios del 2004, año en que se celebró el bicentenario de nuestra independencia, tal movilización y el estado de espíritu combativo de la población aparecieron claramente como la expresión de un cambio en proceso. Provocaron el derrumbe del mito de la popularidad absoluta de Aristide demostrando también la débil capacidad de convocatoria del líder y del partido oficial. Estos fenómenos políticos conllevaron a la ruptura de toda la lógica de funcionamiento del sistema basado en la represión, la intimidación, la manipulación y el inmovilismo de los ciudadanos. La ciudadanía, desde entonces, desafía la brutalidad de los policías y otros agentes represivos. Las instituciones de Estado no podían seguir funcionando una vez que fue paralizado el aparato represor. El pueblo reclamaba la salida de Aristide y esta reivindicación pacífica generalizada exasperaba la violencia de la máquina represiva. Toda esta lucha provocaba la desarticulación del sistema.

El país era el escenario de derrumbe e implosión de un poder que parecía absoluto y todopoderoso. Favoreció, por lo tanto, la entrada en escena de ciertos sectores armados provenientes ya fuera de grupos paramilitares al servicio de Aristide en disidencia, sobre todo en la ciudad de Gonaïves, ya de elementos del antiguo ejército deshecho en 1995 y refugiados en República Dominicana que penetraron por la frontera norte.

En el plano internacional, la lucha unitaria de la oposición pacífica y de la sociedad civil, particularmente del Grupo de los 184 provocó la ruptura del sistema de alianzas subordinadas entre Aristide y la comunidad internacional. Hasta esta etapa de la resistencia del pueblo y de la violencia represiva, ilimitada y criminal, la mayor parte de los países amigos de Haití, como la OEA y la CARICOM, seguían brindando apoyo

al gobierno, dando testimonio de complacencia sino es que complicidad. Se referían a su “legitimidad” mientras reclamaban el enderezamiento de ciertas prácticas políticas ilegales y el cese a las violaciones a los derechos humanos.

Con la explosión inesperada del movimiento popular y la concertación de tantos sectores sociales reclamando la salida de Aristide, la comunidad internacional debió cambiar su fusil de hombro. Por primera vez durante la segunda quincena de febrero, personajes importantes de esta comunidad mencionaron la incapacidad del jefe de Estado de garantizar la seguridad de las vidas y los bienes en Haití y también de garantizar la seguridad en la región del Caribe. En función de este ambiente, una compañía privada de seguridad de Estados Unidos, la Steele Foundation, encargada desde hace aproximadamente dos años de la seguridad de Jean Bertrand Aristide, al no recibir más las garantías apropiadas de las autoridades de Washington, decidió poner fin a la delicada misión de sus agentes en el Palacio Nacional.

#### 4. *La intervención extranjera*

LOS días 1 y 2 de enero del 2004 se cargaron de un significado simbólico en el proceso de constitución del consenso histórico de la nación en la búsqueda de la libertad y de una autodefinition conforme a sus aspiraciones, a la dignidad humana y al desarrollo económico y social. En esta circunstancia, el pueblo haitiano —aferrado, como lo sabemos, y a qué punto, a los valores de la nacionalidad y de una independencia conquistada en condiciones tan heroicas— en vez de celebrar el aniversario número doscientos de su libertad, invadió las calles de la capital y de la provincia para decir *no* a la dictadura y reclamar la salida del dictador cuya conducta deshonoraba a la nación. La Policía y los grupos paramilitares saltaron contra los manifestantes con una violencia sin igual que dejó en saldo de varios muertos y heridos.

En esa ocasión, Plataforma Democrática —coalición política que reagrupó las categorías sociales y políticas más diversas, desde los estudiantes, las asociaciones patronales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, y que reunió en una palabra a la oposición política y a la sociedad civil— entregó un documento reclamando la salida de Aristide al único invitado oficial de alto rango presente en las celebraciones, el presidente de Sudáfrica, Tabo Mbeki.

El 20 de febrero siguiente, este documento servía de base a la posición de la Plataforma Democrática para reiterar las posiciones de la nación frente a las proposiciones que le eran transmitidas por una

delegación internacional de alto rango, compuesta entre otras personalidades por el subsecretario de Estado norteamericano Roger Noriega, el ministro canadiense de la francofonía, Denis Coder, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, de altos funcionarios de la OEA, de la CARICOM y de la Unión Europea. A través de esta delegación, la comunidad internacional renovaba su apoyo a que Aristide, jefe de un Estado mafioso, se mantuviera en el poder hasta el término de su “mandato” que concluía el 7 de febrero del 2006, invitando a la oposición a suscribir un compromiso que incluía, entre otros puntos, la designación por consenso de un primer ministro, cosa que la oposición rechazó.

A fin de cuentas, confrontados con la firmeza de la oposición y el desmoronamiento del sistema, los socios internacionales debieron reaccionar y seguir el sentido marcado por el movimiento general de la sociedad. Aristide fue obligado por la fuerza de las cosas a dejar el poder, evidenciando su derrota política frente al rechazo del pueblo.

Así, el documento de Plataforma Democrática reapareció, despojado de ciertos elementos mayores de su contenido. Sirvió de referencia a la nueva institucionalidad precaria y formal sobre la cual la OEA y la embajada de Estados Unidos se basaban —después de la salida de Aristide— para reconocer como presidente provisional, según el voto de la Constitución, al presidente de la Suprema Corte, el juez Boniface Alexandre y para integrar un Consejo de Sabios compuesto por siete miembros quienes debían contribuir a la designación por consenso de un primer ministro y de su gobierno.

Haití entraba, de hecho, en otra etapa de su historia. Pero el impulso de renovación democrática que quiso imprimir el consenso histórico del 1 y 2 enero del 2004 a la difícil lucha del pueblo para librarse del despotismo fue nuevamente desviado, sino es que truncado.

Mientras tanto había desembarcado en el país una fuerza militar multinacional que Aristide había solicitado a Naciones Unidas en declaraciones públicas, expresando así su miedo a ser arrasado por la ola contestataria generalizada así como su obsesión de quedarse en el Palacio Nacional bajo cualquier circunstancia. Esta solicitud oficial fue reiterada por el presidente Boniface Alexandre. Así, dicha intervención constituyó un corto circuito en el inusitado proceso hacia el consenso y la determinación histórica que la nación haitiana había emprendido para promover, en la unidad de los diversos sectores progresistas, una verdadera liberación.